

# BOLETÍN JURÍDICO

Número 50– Linares, mayo de 2025

## NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA FERIANTES

La ley 21.745 modifica el Decreto Ley 825 de 1974, que regula el impuesto a las ventas y servicios, con el objeto de establecer un régimen tributario especial para comerciantes de ferias libres, permitiendo que las personas naturales que se dediquen a la venta de bienes en este tipo de ferias, que cuenten con un permiso o patente municipal vigente y hayan iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) bajo ese giro específico, puedan acceder a este nuevo régimen.

Para efectos de la ley, se entiende por feria libre o feria el conjunto de comerciantes minoristas y trabajadores independientes que periódicamente o de forma regular o programada ejercen, en un perímetro delimitado, como actividad principal la venta de alimentos de origen vegetal o animal y/u otro tipo de bienes al detalle.

Para lo anterior, se crea un registro especial administrado por el SII, en el que deberán inscribir los interesados. Quienes estén dentro de este régimen no tendrán la obligación de presentar declaraciones de impuestos, llevar contabilidad ni registros auxiliares, y no podrán optar al régimen simplificado ya existente.

Conforme a lo que señala la ley, a los contribuyentes de este régimen especial se les aplicará un impuesto sustitutivo del impuesto del Título relacionado con el impuesto al valor

agregado que establece el citado decreto ley 825, con una tasa de 1,5% sobre las ventas pagadas por medios electrónicos autorizados, sin deducciones. El impuesto se devenga al momento del pago electrónico en ferias libres.

Asimismo, los contribuyentes acogidos a este régimen no tendrán derecho a crédito fiscal por la adquisición de bienes o servicios relacionados con su actividad. Sin perjuicio de ello, deberán exigir y emitir la documentación tributaria correspondiente en sus operaciones.

Por otra parte, la ley establece una serie de disposiciones transitorias para facilitar la implementación del nuevo régimen. Así, quienes ya ejercen la actividad y cumplen con los requisitos tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para inscribirse en el registro del SII, sin que se les pueda rechazar por tener deudas tributarias anteriores. También se otorgan beneficios como la asistencia prioritaria de la Defensoría del Contribuyente para apoyar el cumplimiento de esta normativa.

Finalmente, las modificaciones señaladas entrarán en vigor el 1 de agosto de 2025, conforme lo establece el artículo primero transitorio.

*Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional*

# LEY DE ENFERMEDADES RARAS

La ley 21.743 establece un marco normativo para las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, definiéndolas como aquellas que afectan a menos de una persona por cada dos mil habitantes.

Su objetivo es promover políticas, programas y acciones orientadas a su atención y tratamiento. Se crea una Comisión Técnica Asesora que apoyará al Ministerio de Salud en el desarrollo de políticas para estas enfermedades, integrada por expertos y representantes de organizaciones civiles.

El Ministerio de Salud deberá mantener un listado actualizado de estas enfermedades y un Registro Nacional de personas afectadas, resguardando sus datos personales y garantizando su acceso a prestaciones de salud.

La ley entrará en vigencia 60 días después de su publicación, excepto el artículo 6 que regula el registro, que dependerá de una norma técnica.

*Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional*

# PROTOCOLOS DE EMERGENCIA EN EVENTOS DEPORTIVOS

La ley 21.739 tiene por objeto exigir la implementación de protocolos de emergencia en actividades y competencias deportivas, para lo cual modifica la ley 19.712, del Deporte.

Para dicho propósito, se agrega un nuevo inciso al art. 4 de la citada ley, estableciendo que los planes y programas deben promover no solo la capacitación, sino también la implementación de protocolos de actuación y manejo básico de emergencias ante accidentes en actividades y competencias deportivas. Se fomenta la colaboración de universidades, cuerpos de bomberos y otras entidades, que por sus funciones y fines, puedan colaborar en materia de capacitación y fortalecer estos protocolos.

Finalmente, se incorpora un nuevo art. 32 quinquies, que obliga a las organizaciones superiores, como federaciones o asociaciones deportivas, a capacitar a sus miembros y garantizar la implementación de protocolos de emergencia. El Ministerio del Deporte será responsable de proponer estos protocolos y asegurar su cumplimiento adecuado.

*Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional*

## Sistema de búsqueda y alerta prioritaria para identificación y localización de prófugos

La ley 21.738 modifica el art. 7 de la Ley 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, con el objeto de ampliar las entidades con acceso al registro e introduciendo un sistema coordinado de búsqueda para los casos de mayor prioridad.

Entre las modificaciones más relevantes, se incluye la incorporación de la Dirección General de Aeronáutica Civil como entidad con acceso al registro. También se otorga acceso limitado a otros organismos públicos para verificar si una persona se encuentra en el registro, garantizando la confidencialidad de la información.

Además, dispone que en investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público podrán confeccionar una nómina pública de personas prófugas consideradas prioritarias, incluyendo su nombre, fotografía y detalles del delito. Esta lista será publicada en los portales institucionales de las entidades de orden y seguridad pública y podrá ser divulgada en otros medios, siempre respetando criterios de confidencialidad y protección de datos. Un reglamento determinará los criterios de priorización para la inclusión en esta lista.

En términos de la ley, la publicación de esta información tiene como único fin facilitar la denuncia de las personas prófugas, sin autorizar su detención por particulares.

Finalmente, el Ministerio Público podrá ordenar a las aerolíneas la verificación de la lista pública de prófugos antes del embarque de pasajeros, para efectos de informar si se encuentran coincidencias, como medida adicional para su localización.

*Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional*

## Ampliación de excepciones en numero de estacionamientos en Copropiedad Inmobiliaria

La ley 21.742 modifica la Ley 21.442, sobre Copropiedad Inmobiliaria, con el objeto de ampliar las excepciones a las exigencias contenidas en sus artículos 60 y 70, referidas, respectivamente, a la dotación mínima de estacionamientos en proyectos de viviendas de interés público y a las limitaciones en la subdivisión de unidades habitacionales en condominios.

Establece que no será aplicable el artículo 70 de la Ley N° 21.442 a los proyectos habitacionales que, al 1 de enero de 2024, se encuentren en alguno de los siguientes estados de avance: cuenten con subsidio habitacional asignado; hayan sido calificados por el Servicio de Vivienda y Urbanización o se encuentren ingresados a dicho Servicio para su evaluación; o tengan un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales respectiva, o bien, lo hayan ingresado para su aprobación o para la obtención del permiso de edificación.

En cuanto a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 60, la obligación de contemplar un número mínimo de estacionamientos en los nuevos condominios de viviendas de interés público será exigible solo respecto de aquellos proyectos que soliciten permiso de edificación a contar del 1 de enero de 2025. Se exceptúan de esta exigencia aquellos proyectos que, a esa fecha, se encuentren en alguno de los estados de avance anteriormente señalados.

*Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional.*

## RESUMEN DE JURISPRUDENCIA

### Corte Suprema, rol 13.197-2025

RECURSO DE AMPARO, ACOGIDO - DEBER DE FUNDAMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, EN ESPECIAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES EN SEDE PENAL - TRIBUNAL NO FUNDAMENTÓ MANTENIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA ANTE REAGENDAMIENTO DE JUICIO ORAL - NECESIDAD DE UN PRONTO Y OPORTUNO JUZGAMIENTO.

En lo concerniente a las formas que deben seguirse para privar de la libertad personal a un imputado mediante la medida cautelar de prisión preventiva, el artículo 36 del Código Procesal Penal, norma que rige para toda resolución y actuación judicial y, por tanto, también para aquella que resuelve una petición de esa medida, dispone que “Será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación”.

El artículo 122 del mismo código, consagra como principio general de toda medida cautelar personal, que estas “serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada” y el artículo 143 del citado cuerpo legal, ya específicamente en relación a la prisión preventiva, señala que al concluir la audiencia respectiva, “el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren la decisión” (consid. 2).

Empero, de haberse levantado en la audiencia una oposición fundada por la defensa del imputado a la prisión preventiva, ello importa que, junto a lo antes dicho, el juez debe explicar los motivos por los cuales tal oposición no desvirtúa los antecedentes invocados por el solicitante ni le impiden tener por concurrentes los requisitos necesarios para decretar la medida

cautelar en comento. Tal exigencia, sin perjuicio de que viene impuesta también por la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3, inciso 6°, de la Carta Fundamental, interesa aquí abordarla como parte de las exigencias de forma impuestas por la propia Constitución para privar de su libertad personal a una persona” (cons. 3).

En el caso sub lite, en la audiencia realizada para el conocimiento del recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Talca, la defensa del imputado reiteró la alegación vertida ante el Tribunal Oral en lo Penal, acerca de la necesidad de un pronto y oportuno juzgamiento y las consecuencias para su libertad, argumento que fue ponderado por dicho tribunal en la modificación de la medida cautelar, alegaciones respecto de las que la recurrida no realiza pronunciamiento alguno, ignorando el impacto que el reagendamiento del juicio, para prácticamente 10 meses de la fecha original, representa para la libertad del amparado.

Así, la falta de fundamentación de cualquiera de dichos extremos impacta en la legalidad de la privación de libertad del amparado y necesariamente conduce a dar lugar a la acción constitucional deducida (cons. 4).

*Fuente: Poder Judicial*

### Corte Suprema, rol 133.107-2022

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO, ACOGIDO - NORMAS DE DERECHO INTERNO DEBEN ARMONIZAR CON LAS REGULATORIAS DE DERECHOS HUMANOS, POR APLICACIÓN DEL ART. 5 INC. 2° CONSTITUCIONAL - TRATADOS DEBEN SER CUMPLIDOS DE BUENA FE, SIN QUE SE ALEGUEN DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO COMO IMPEDIMENTO - EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, POR TANTO, NO ES APLICABLE EN CASOS DE INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIONES A LOS DD.HH..

En este orden de ideas, de acuerdo al deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Estado

debe cumplir con las normas sobre derechos humanos y al implícitamente no hacerlo luego del requerimiento, al controvertirse por cualquier medio tal principio de favorabilidad que protege a la persona afectada, se debe aplicar por el tribunal el Derecho interno de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de convencionalidad, interpretando y aplicando las normas nacionales que pudieren afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia. Sin que ninguna norma del Derecho interno permita alguna distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad (consid. 6 sent. reemplazo).

Es un principio general de Derecho Internacional, el que los Estados se obligan a cumplir los tratados de buena fe. Por lo que el Estado no puede descansar en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales, porque se lo impide su legislación interna (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), dado que tiene que observar las disposiciones del tratado en toda su integridad. Máxime si el tratado a aplicar ha recibido toda la fuerza legal interna al haber sido ratificado y haber cumplido todos los trámites establecidos en el ordenamiento jurídico para su promulgación (cons. 7).

La importancia de los razonamientos efectuados es que permiten aseverar que, al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que

pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (cons. 8).

Todo lo que se lleva reflexionado evidencia el error de Derecho en que incurre la sentencia en examen, pues hace primar lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil sobre la normativa internacional examinada que impone al Estado de Chile el deber de reparar íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos que demandan los familiares de las víctimas y cuya existencia no ha sido controvertida. Ese yerro ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo, pues impidió pronunciarse al tribunal sobre las demandas deducidas contra el Fisco de Chile y, por consiguiente, establecer la responsabilidad extracontractual de éste por las acciones y omisiones de sus agentes establecidas en el fallo en examen (cons. 9).

No se desconoce aquí la validez y legalidad de los fallos anteriores, incluso dictados por esta propia Corte que declaran la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado de Chile, sino sólo se reconoce que la excepción de cosa juzgada derivada de esos pronunciamientos consagrada en el citado artículo 177, norma interna de carácter meramente legal, debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya referidos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior (c. 11).

*Fuente: Poder Judicial*

---

### **Dictámenes de la Contraloría General de la República**

**E68056 - Compras públicas - Principio de estricta sujeción a las bases** - No procede que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas modifique, a través de un instructivo interno, lo dispuesto en las bases de licitación sobre la exigencia de dotación mínima del personal manipulador de alimentos.

**E67826 - Municipal - Organización y atribuciones municipales** - Marco normativo vigente no contempla una autorización para que las municipalidades puedan prestar los servicios propios de las casas funerarias.

**E63640 - Salud municipal - Remuneraciones** - Remuneraciones y beneficios de los funcionarios municipales sujetos a la ley N° 19.378, son materia del dominio o reserva legal, por lo que solo se puede acceder a aquellos fijados en virtud de una norma de ese rango.



**E68062 - Compras públicas - Compra ágil** - No resultó procedente que el Instituto Nacional de Estadísticas exigiera una marca específica en los procesos de compras ágiles que se indican.

**E44918 - Superintendencia de Educación - Organización y atribuciones** - La Superintendencia de Educación debe dar continuidad a los procesos de fiscalización y administrativos, aun durante los períodos de feriado legal de los docentes y asistentes de la educación.

**E44877 - Contratación pública - Evaluación de ofertas** - Apreciación de los aspectos técnicos de las ofertas requeridos en las bases de una licitación deber ser efectuada de manera fundada por la comisión evaluadora.

## Dictámenes de la Dirección del Trabajo

**ORD.Nº294:** Se autoriza el pago del bono compensatorio del beneficio de sala cuna, mientras no se haga uso de ese derecho por medio de una de las alternativas previstas en el artículo 203 del Código del Trabajo y se mantengan las condiciones descritas en el presente informe, esto es, ausencia de sala cuna particular autorizada que ofrezca el servicio de sala cuna en la comuna de Panguipulli.

**ORD.Nº272/8:** 1) En el marco de la prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo resulta exigible que el empleador cumpla con su obligación de proveer el derecho a sala cuna establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo. 2) La madre trabajadora que preste servicios bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, y se encuentre dentro de los presupuestos del artículo 203 del Código del Trabajo, mantiene el derecho a que su empleador disponga de la respectiva sala cuna, lo que no siendo posible de cumplir bajo alguna de las alternativas previstas en dicha normativa legal, habilita a las partes a acordar el pago de un bono compensatorio; considerando el carácter irrenunciable de dicho derecho y la necesidad de resguardar la salud del menor. 3) La madre trabajadora que ha suscrito con su empleador un acuerdo de pago de un bono compensatorio de sala cuna, atendidas las condiciones de salud del niño o niña menor de dos años que no permiten que asista a la respectiva sala cuna, mantiene su derecho a solicitar que aquel le ofrezca que todo o parte de su jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones.

**ORD.Nº271/7:** 1. No corresponde al empleador negar la tramitación de las postulaciones a la bonificación por retiro voluntario regulada en la Ley N°20.976 que reciba, debiendo dar cumplimiento a su obligación de remitirlas, junto con sus antecedentes, a la Subsecretaría de Educación. 2. La carga horaria a considerar para las profesionales de la educación que postulen a la bonificación por retiro voluntario, entre los 61 y 65 años, corresponde al número de horas de contrato vigente al 31 de octubre del año anterior al de su postulación, con las precisiones señaladas en el cuerpo del presente informe.



Este Boletín tiene una

Licencia Creative Commons BY 4.0:

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

### REDES SOCIALES Y CONTACTO

sergioarenasb

sergioarenasabogado

sergioarenas.abogado

995459643